

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 22º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-46-2022
CARATULADO : CALDERÓN/FISCO-CDE

Santiago, veintiuno de Octubre de dos mil veintidós

VISTO:

A folio 1, comparece Mario Armando Cortez Muñoz, abogado, y Alex Esteban Sepúlveda Rodas, habilitado de Derecho, en representación convencional de **VICENTE HERNÁN CALDERÓN LOYOLA**, empleado, domiciliados para estos efectos en Carmen 602 departamento 2611, Santiago, quien viene en interponer demanda de indemnización de perjuicios, en juicio de hacienda, en contra del **FISCO DE CHILE**, representado legalmente por Juan Antonio Peribonio Poduje, presidente del Consejo de Defensa del Estado, con domicilio en Agustinas N° 1225, 4º piso, Santiago.

Funda su pretensión en que con fecha 2 de enero de 1968 fue contratado como chofer de aseo y jardines de la municipalidad de San Miguel. Luego, ingresó al Partido Socialista de Chile, saliendo en comisión de servicio para acompañar al diputado Mario Palestro Rojas. Llegado el día 11 de septiembre de 1973, regresó al municipio en razón de haber concluido su comisión de servicio.

Luego, manifiesta que el 8 de enero de 1974, encontrándose en su domicilio, que corresponde actualmente a la comuna de San Joaquín, a las 15 horas aproximadamente llega un camión de la Fuerza Aérea de Chile con personal militar preguntando por su persona, inquirendo sobre el armamento que se encontraba en su domicilio particular, respecto de lo cual negó su existencia, razón por la que el personal habría ingresado con violencia a su hogar, destruyendo sus enseres en búsqueda de los elementos indicados.

Refiere que al no haber encontrado arma alguna en su domicilio, le obligaron a excavar en el patio trasero en búsqueda de ellas, y que al no hallar nuevamente ningún armamento, fue vendado en sus ojos, amarrado de manos y pies y violentamente golpeado, en frente a su familia, para



Foja: 1

posteriormente ser trasladado a la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea de Chile, en donde fue detenido hasta el día 18 de enero de 1974, lugar en donde habría sido víctima de torturas a diario, consistentes en golpes de puño y pies, aplicación de electricidad en distintas partes del cuerpo, siendo interrogado constantemente sobre la existencia de armas, además afirma haber sido sometido en ocasiones a simulacros de fusilamiento, y que casi no recibió alimentación, agua y fue privado de dormir durante esos días.

Manifiesta finalmente que el proceso de torturas no culminó con su liberación, pues fue exonerado del lugar del trabajo sin indemnización alguna.

Hace presente que el demandante, fue reconocido como víctima de violación a los Derechos Humanos, por el propio Estado chileno, encontrándose en el listado de Prisioneros Políticos y Torturados, elaborado por las Comisiones Nacionales sobre Prisión Política y Tortura, conocidas también como informes Valech I y II.

Posteriormente procede a citar diversos pasajes del informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, en los cuales se describen los sucesos ocurridos al momento del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y posteriores, y como esto afectó a la democracia y la vida de las personas a través de las sistemáticas conductas represivas del Estado y sus agentes.

Expone que en el caso particular de su representado, su vida se vio violentamente interrumpida por el Estado, quien vulneró los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, transformándolo en víctima, lo que lo cambió para siempre en forma involuntaria. Indica que en este contexto es deber del estado indemnizar a todo ciudadano que haya sido sometido a vejámenes físicos y morales que con ocasión de detenciones ilegales, torturas, prisión política, persecución, y ejecuciones hayan provocado sus agentes.

Explica que en consideración de los hechos antes descritos es que se debe indemnizar a su representado por los graves daños que ha sufrido y producto de los diversos abusos de los que fue víctima, que hasta el día de hoy se traducen en dolor, sufrimiento, impotencia, miedo y amargura.



Foja: 1

Luego en cuanto a los fundamentos de derecho, explica que la responsabilidad del Estado en nuestro país emana de la Constitución Política y de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

Pormenoriza que en la Constitución Política de la República, en sus artículos 6, 7 y 38 establece la responsabilidad de Estado y a raíz de estas disposiciones se ha dispuesto una normativa específica que se vio reflejada en las disposiciones de la Ley N°18.575, las que instauran en nuestro país una responsabilidad directa del Estado, por el daño que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, o con ocasión de sus funciones, y sea que el daño se produzca en un funcionamiento normal o anormal, regular o no, jurídico o de hecho, de la administración, pues el legislador no distingue. Así se ha venido sosteniendo desde el año 1986 como en el caso “Vásquez con Fisco”.

Agrega que ello hace entender la responsabilidad del Estado como una responsabilidad de derecho público, la que no se basa en el dolo o la culpa causante del daño, bastando la existencia de un daño ocasionado por la administración para determinar la responsabilidad de este, esto puesto que el administrado no tiene por qué soportar los daños que el Estado genera en sus actividades en su patrimonio personal.

Explica que los hechos descritos en esta demanda constituyen crímenes de lesa humanidad, entendidos estos como los actos inhumanos, tales como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos o culturales, perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que actúen por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia. Explica que el vínculo entre el derecho imperativo con los crímenes de lesa humanidad fue constatado simultáneamente a través de la jurisprudencia internacional. Indica que en el ámbito nacional existe regulación vigente para entender cuando se está frente a un delito de lesa humanidad, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Ley N°20.357.

Posteriormente indica que intentar aplicar el derecho común a casos como el de autos supone un incumplimiento grave por parte del Estado de Chile a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y a su calidad



Foja: 1

de Estado perteneciente a la comunidad internacional, así como a los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, amparados por los tratados internacionales ratificados por Chile sobre la materia que obligan a la Nación a reconocer y proteger ó este derecho a la reparación integra, con arreglo a lo ordenado en los artículos 5°, inciso segundo, y 6° de la Carta Política. Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos estatuyen que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros aspectos de derecho interno, pues si se comete un hecho punible imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de este por la inobservancia de un canon internacional, con el subsecuente deber de reparación y de hacer cesar los colofones del agravio.

Pormenoriza que en razón de lo señalado en el párrafo precedente no se pueden aplicar las normas civiles ni penales de la prescripción, por lo que las acciones provenientes de delitos de lesa humanidad. Luego cita jurisprudencia nacional en apoyo a su tesis de imprescriptibilidad.

Por último expone que el daño moral que proviene de la vulneración a los derechos fundamentales sufrido por su representado, tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de aquel. En este sentido, esta clase de daño no requiere prueba, bastando que se acredite la lesión de un bien personal, para que se infiera el daño. Indica que el Estado debe responder por los daños generados como consecuencia de la vulneración a derechos fundamentales en el ámbito internacional la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 63.1 dispone que: Cuando hubo violación de un derecho o libertad protegidos por esta Convención dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Agrega que como se relató su representado fue víctima de detención ilegal y arbitraria, torturas, apremios físicos y psicológicos crueles, inhumanos y deliberados, víctima de violaciones a los derechos humanos, persecución y prisión política, todo ello perpetrado por agentes del Estado.



Foja: 1

En el petitorio solicita que se condene al demandado a pagar al demandante la suma de \$300.000.000.-, más intereses, reajustes legales y con costas; o, en subsidio, condenar al demandado al pago de las sumas y cantidades de dinero, que estime de justicia y equidad, debidamente reajustadas, con intereses y costas.

A folio 8, consta notificación personal subsidiaria del demandado.

A folio 9, la demandada contesta, oponiendo las excepciones de reparación integral del daño y la prescripción, solicitando se rechace la acción de autos en todas sus partes, con costas o en subsidio rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

En cuanto a la excepción de reparación integral, alega la improcedencia de la pretensión del actor, porque ya habría sido indemnizado. Principia efectuando una relación del marco general de las reparaciones ya otorgadas, dentro de la denominada “Justicia transicional”, indicando que dentro de un concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación. Estos programas incluirían beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero, según quedó plasmado en la Ley N°19.123 y otras normas jurídicas conexas, las cuales describe extensamente. Añade que existe identidad de causa entre lo pedido en autos y las reparaciones realizadas, puntualizado que puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos no solo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables, por lo que las pretensiones acá indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, exigirse nuevas reparaciones.

Subsidiariamente, como fuere dicho con antelación, deduce excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo a lo preceptuado por el artículo 2332 del Código Civil, en relación con el artículo 2497 del mismo cuerpo normativo. Funda su defensa en que



Foja: 1

conforme el relato de la parte demandante, la detención ilegal, prisión política y tortura que sufrió, ocurrió a partir del 08 de enero de 1974, por lo que, suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 21 de febrero del 2022, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil. Así las cosas, concluye que el plazo de 4 años establecido por la norma citada ha transcurrido con creces. Sin perjuicio de ello, y para el evento en que el Tribunal estimare que dicha norma no es aplicable en el caso de autos, viene en oponer la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil fundada en que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de las acciones civiles ejercidas en este pleito, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil. Refrenda su defensa con jurisprudencia y normas de derecho internacional, señalando particularmente que no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, procede el rechazo de la demanda por la prescripción de la acción civil.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, viene en formular las alegaciones en cuanto a la naturaleza de las indemnizaciones solicitadas y al monto pretendido, expuestas a continuación.

Sostiene que tratándose del daño puramente moral, la finalidad de restablecimiento del equilibrio destruido por el hecho ilícito no es alcanzable de ninguna manera, así como tampoco puede plantearse que compense en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél, por cuanto el daño moral no se borra por obra de la indemnización, y en tanto la pérdida o lesión producida por él permanece cualquiera sea la magnitud de la suma de dinero que se perciba, razón por



Foja: 1

la cual la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

De tal forma, y en subsidio de las excepciones de reparación y prescripción opuestas, sostiene que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado, conforme a las leyes de reparaciones N° 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente, y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Además respecto de los intereses y reajustes, postula su improcedencia, toda vez que si bien la actora solicita su pago desde la notificación de la demanda hasta el pago efectivo de las sumas indemnizatorias, a la fecha de interposición de la demanda de autos, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, no existe obligación alguna de indemnizar de parte de su representada, no existiendo de esta forma suma alguna que reajustar. Del mismo modo, esgrime respecto de los intereses que el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado en el cumplimiento de una sentencia. Por lo anterior, concluye que en el hipotético caso en que se acogieren las acciones de autos y se condenare a su representado al pago de una suma indemnizatoria, sus reajustes e intereses solo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

A folio 12, el demandante evacúa el trámite de réplica explicando que las vías de reparación administrativa y judicial son complementarias y no excluyentes, citando jurisprudencia en apoyo. Respecto a la excepción de prescripción, sostiene que la acción ejercida contra el Fisco busca obtener la reparación de los perjuicios ocasionados por agentes del Estado, por lo que de acuerdo a los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y los artículos 5 y 6 de la Constitución Política, se obliga al Estado a reconocer y proteger el derecho a la reparación integral,



Foja: 1

citando igualmente fallos en apoyo a sus postulados. Finalmente, en cuanto al monto solicitado, aduce que es de plena justicia atendida la naturaleza de los hechos planteados en la demanda, indicando que corresponde al tribunal analizar la procedencia de reajustes e intereses.

A folio 14, comparece la demandada evacuando el trámite de duplica, reiterando las alegaciones, excepciones y defensas opuestas en su escrito de contestación, solicitando el rechazo de la demanda.

A folio 15, se recibe la causa a prueba.

A folio 28, se citó a las partes a oír sentencia.

A folio 31, se tuvieron documentos acompañados en calidad de medida para mejor resolver.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, **VICENTE HERNÁN CALDERÓN LOYOLA**, viene en interponer demanda de indemnización de perjuicios, en juicio de hacienda, en contra del **FISCO DE CHILE**, conforme fuere indicado en la parte primera de esta sentencia.

SEGUNDO: Que, la demandada, contestando la acción dirigida en su contra, solicita su total rechazo, con costas, por los fundamentos expresados precedentemente.

TERCERO: Que, en apoyo a su pretensión, la demandante produjo la siguiente prueba.

A folio 18:

1.- Copia de norma técnica para la atención en salud de personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el periodo 1973-1990, elaborado por la Subsecretaría de Salud Pública División de Prevención y Control de Enfermedades, Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud.

2.- Presentación titulada “Características del daño y trauma en afectados directos de violaciones a los DDHH”, elaborada por el psicólogo Freddy Silva G., en su calidad de coordinador equipo especializado PRAIS, servicio de salud Aconcagua, 16 de octubre de 2017.

3.- Presentación titulada “Transgeneracionalidad del daño”, elaborada por el psicólogo Freddy Silva G., en su calidad de coordinador equipo especializado PRAIS, servicio de salud Aconcagua, 16 de octubre de 2017.



Foja: 1

4.- Conferencia internacional “Consecuencias de la tortura en la salud de la población chilena: desafíos del presente”, elaborado por el Ministerio de Salud.

5.- Informe en términos generales sobre secuelas dejadas en el plano de salud mental relacionadas con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Caso: D. Hernán Díaz Jiménez, elaborado por Paula Hinojosa Oliveros, psicóloga del programa de reparación y atención integral en salud y derechos humanos-PRAIS, Servicio de Salud Metropolitano Norte, con fecha 23 de septiembre de 2016.

6.- Columna de opinión denominada “Represión política, daño transgeneracional y el rol del estado como agente reparador”, redactada por Sergio Beltran P., psicólogo clínico del Programa de Reparación Integral en Salud, del Servicio de Salud Araucanía Norte, publicada el 30 de junio de 2017.

7.- Copia de informe denominado algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico-psiquiátrico, de julio de 1978.

8.- Copia de informe denominado algunos factores de daño a la salud mental, elaborado por la Vicaria para la Solidaridad.

9.- Copia, informe, sobre la tortura, tratos crueles e inhumanos y su impacto psicológico, las prácticas de amedrentamiento a la población, relegaciones y su impacto psicológico en las personas y en la familia, entre otros, elaborado en julio de 1980.

10.- Copia, informe denominado: Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, elaborado por Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards, Ximena Taibo Grossi, Asistentes Sociales del Departamento Jurídico de la Vicaria de la Solidaridad, en abril de 1987.

11.- Copia, informe denominado: Salud Mental y Violaciones a los Derechos Humanos, realizado por el equipo de salud de la Vicaria de la Solidaridad, integrado por los Doctores. Andrés Donoso, Guillermo Hernández, Ramiro Olivares, el Psicólogo Sergio Lucero, y la auxiliar de enfermería Janet Ulloa, en junio de 1989.



Foja: 1

12.- Copia, informe realizado por el equipo de profesionales de la salud de La Vicaria de la Solidaridad, denominado: Efectos con la salud física y mental en la población a consecuencia de la represión en las protestas y otras acciones masivas.

13.- Copia, estudio de salud mental en presos políticos en periodo de transición a la democracia, realizado por el Neuropsiquiatra Jacobo Riffo y la Psicóloga Viviane Freraut del equipo de salud mental del DITT (Detención, Investigación y Tratamiento de la Tortura) y CODEPU (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo).

14.- Estudio Significado psicosocial de la tortura, ética y reparación, realizado por Elisa Neumann, psicóloga y por Rodrigo Erazo, psiquiatra, del equipo médico psiquiátrico de FASIC.

15.- Monografía denominada Lo Igual y lo Distinto en los Problemas Psicopatológicos Ligados a la Represión Política, realizada por el Psiquiatra Mario Vidal del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), elaborado en 1989.

16.- Estudio denominado Trauma Político y Memoria Social realizado por E. Lira y M. Castillo, del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS), publicado en la revista Psicología Política, N° 6, 1993, paginas 95-116.

17.- Ponencia denominada Tortura y Trauma Psicosocial, realizada por el Médico Psiquiatra Carlos Madariaga, miembro del Comité Directivo y director clínico de CINTRAS, integrante del Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de la Tortura (IRCT).

18.- Estudio denominado Consecuencias Psicosociales de la Represión Política, realizado por la Psicóloga Elizabeth Lira.

19.- Monografía denominada Aspectos Psicosociales de la Represión Durante la Dictadura, realizado por María Teresa Almarza, Psicóloga del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS). Año 1994.

20.- Monografía denominada Tortura y trauma: El viejo dilema de las taxonomías psiquiátricas, realizada por el Psiquiatra Carlos Madariaga, de CINTRAS.



Foja: 1

21.- Estudio denominado las peores cicatrices no siempre son físicas: la tortura psicológica, realizado por el doctor Hernán Reyes, de la división de asistencia del CICR.

22.- Copia de página 29, que correspondería a la nómina de víctimas emitido por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura. En este consta que se registra el nombre de Vicente Hernán Calderón Loyola y el RUN 6.191.358-0, bajo el número 1421.-

23.- Capítulo III del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, titulado: Contexto.

24.- Capítulo V del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, titulado: Métodos de tortura: definiciones y testimonios.

25.- Capítulo VIII del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, titulado: Consecuencias de la prisión política y la tortura.

26.- Copia de Informes denominados: La Tortura Modelo de Intervención y La Tortura Un Problema Médico. Ambos emitidos y realizados por el equipo de salud mental de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) el año 2005 y 1983.

27.- Copia de Informe denominado Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos. Realizado por el equipo de profesionales de salud mental del Instituto Latino Americano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS), el 22 de agosto de 2019.

28.- Informe psicológico, respecto del demandante, elaborado por Carolina Canales Cortes, psicóloga.

A folio 19:

1.- Artículo denominado “Estudio descriptivo de mortalidad en sobrevivientes de tortura y prisión política en el período de la dictadura militar en Chile, 1973-1990” María José Jorquera, Carlos Madariaga, María Soledad Burrone, Eric Tapia, Lisandro D. Colantonio, Rubén Alvarado. Rev Med Chile 2020; 148, páginas 1773 a 1780.

2.- Artículo denominado “Tortura, dolor psíquico y salud mental” del doctor Octavio Márquez Mendoza.

CUARTO: Que, por su parte, el demandado acompañó la siguiente prueba.

A folio 29, en calidad de medida para mejor resolver:



Foja: 1

1.- Copia de ORD.: DSGT N°4792-6610, del IPS que informa los beneficios de reparación del demandante de autos, entre otras personas. Conforme se lee en este oficio Ord. 1214- del 14 de abril de 2022, el demandante desde octubre de 2011 hasta abril de 2022 ha recibido un total de \$23.614.263.- pesos por ser parte de la Comisión Valech, percibiendo pensión por Ley y N°19.992, Ley N° 20.874, más aguinaldos.

QUINTO: Que, entrando al fondo del asunto discutido en autos y sometido a decisión de esta magistratura y en cuanto a la efectividad de existir un hecho ilícito del Estado o sus agentes, ha de considerarse como un hecho público y notorio que en el período comprendido entre el 11 de septiembre del año 1973 y hasta el término del gobierno de facto detentado por las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, existieron casos en nuestro país en que abiertamente se violentaron los derechos humanos y esenciales de personas por parte de agentes del Estado. Lo anterior ha sido fallado por diversos tribunales que han destacado la existencia de organizaciones al interior del Estado, tendientes a establecer un régimen sistemático de represión respecto de personas, cuyas ideas o actividades, contravenían las órdenes dadas e impartidas por el gobierno de aquel entonces.

Sin perjuicio de lo anterior, respecto de los hechos constitutivos de delito de lesa humanidad, que habrían sido cometidos indebidamente por el Estado de Chile a través de sus agentes en contra del actor, solo figuran aquellos relatados por el actor, y que son coincidentes con aquellos relatados en el libelo, y ante la profesional psicóloga Carolina Canales Cortés, acompañado a folio 18, el que fue emitido por un tercero ajeno al juicio que no ha comparecido en autos a reconocerlo, por lo que no se le puede otorgar pleno valor probatorio. Por otra parte, el actor acompañó un documento que indica se trataría de aquel denominado “*Nómina Comisión Nacional Sobre Prisión Política Y Tortura*” sin embargo, no se advierte en el instrumento signado con el número 22 de la carpeta de folio 18, que se trate de ese instrumento, y lo que es posible leer en la referida hoja, bajo el número 1421 el nombre y RUN del actor, por lo que se advierte que este instrumento no se encuentra íntegro, no contiene firma, logo, timbre o firma del emisor, por lo que tampoco es posible otorgar pleno valor probatorio, salvo como base de una presunción judicial.



Foja: 1

Sin perjuicio de la insuficiencia de la prueba rendida, los hechos constitutivos de la demanda deducida por responsabilidad del Estado no han sido discutidos ni han sido controvertidos por la demandada, por el contrario del mérito del escrito de contestación, se puede concluir que se reconoce al actor como víctima y parte del informe emitido por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, alegando incluso que el actor ha sido reparado por la diversas leyes que se han dictado al efecto, tal como consta en el oficio que se tuvo incorporado en autos como medida para mejor resolver, por lo que se tendrá por cierto que el actor fue víctima en el periodo que indica el actor en su libelo, de torturas, vejámenes, y diversos maltratos cometidos por Agentes del Estado de Chile, constitutivos de violaciones a los derechos humanos.

Así las cosas, evidentemente no hay duda que por los hechos padecidos por el actor, los que en términos generales han sido analizados y reconocidos en la gran cantidad de informes acompañados en autos por diversos organismos en relación a las víctimas (en general) de los actos de detenciones ilegales y torturas; existió una repercusión efectiva en la vida del demandante, en la forma que manifestó en su libelo.

SEXTO: Que, encontrándose establecida la responsabilidad objetiva del Estado de Chile y la forma en que su actuar por medio de sus órganos afectó la vida del actor, es importante tener en vista que tal como lo señalara Norberto Bobbio –doctrina que esta magistratura hace suya-, las normas jurídicas no existen nunca solas, sino siempre en un contexto de preceptos que tienen entre sí relaciones particulares, lo que se acostumbra a denominar ordenamiento, y al que suele definírsele como el conjunto unitario y coherente de normas que rigen en un cierto momento, dentro de un ámbito espacial determinado. En tal sentido es que las normas jurídicas que lo componen, deben estar vinculadas unas con otras coordinada o subordinadamente. Además, los principios generales del derecho o el “espíritu general de la legislación” en los términos del artículo 24 del Código Civil, forman parte del ordenamiento jurídico, viven en su interior e informan sus normas e instituciones. De ahí entonces, es que además del derecho interno, nuestro ordenamiento jurídico positivo tiene vinculaciones con el derecho internacional, mismo que ha analizado y se ha pronunciado



Foja: 1

sobre las implicancias de los hechos que importan la infracción y violación a los derechos humanos, muchos de cuyos textos ya han sido citados por las partes y que en ninguno de ellos se excluye la aplicación del derecho nacional o interno. En el caso de marras, el actor invoca tanto las normas establecidas en la Constitución Política de la República, como artículos de la Ley 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, unidas a las disposiciones contenidas en la Convención de Ginebra y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al efecto, es menester tener presente que el derecho interno de cada Estado, no ha sido excluido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos –normativa aplicable a casos como el de autos- sino que es reconocido en su propio preámbulo, remitiéndose a él con el propósito de consolidar en los Estados Americanos, la defensa y respeto de los derechos esenciales del hombre que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. Así, expresamente señala que tiene “justificación la protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos (sic)”. Luego, la normativa que contempla la citada convención se expone como coadyuvante y complementaria al derecho interno de cada estado miembro, sin excepción. Por su parte el artículo 1 consagra un deber de los Estados miembros de respetar los derechos y libertades reconocidos en esa Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna; y a su vez el Capítulo VIII de la Convención, que regula la organización, composición y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 63 N°1, dispone que cuando -esa Corte- decida que hubo violación de un derecho o libertad protegida, dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados, y dispondrá asimismo, siempre que fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Es así que esta norma acepta y contempla, entre las competencias de la Corte Interamericana y siempre que fuera procedente, se reparen las



Foja: 1

consecuencias y el pago de una justa indemnización, es decir, es una norma que fija las potestades de esa Corte para cuando conozca en un juicio determinado.

Dicho lo anterior, es menester señalar que el derecho público interno chileno, es el que justamente permite a este sentenciador conocer y pronunciarse sobre el caso de marras, y que le da la posibilidad al actor de accionar y tramitar conforme al procedimiento común ordinario contenido en el Código de Procedimiento Civil, por lo que no se advierte norma alguna que, por tratarse de asuntos de violación a los derechos humanos como fuente de la acción, se vea limitada su competencia ni las facultades que la Ley y la Constitución Política de la República le han conferido, teniendo plena potestad para dar aplicación a la normativa interna, tanto procesal como de fondo. A mayor abundamiento, es precisamente el Código Civil el que entrega por ejemplo, las reglas aplicables en cuanto a la interpretación de las normas, la carga de la prueba y la valoración de ellas frente a un caso determinado.

En consecuencia y por mucho que se trate de una acción indemnizatoria por causa de violación de derechos humanos, no puede perderse de vista que estamos ante un Estado de Derecho, y por ello, existiendo normativa vigente expresa en el ordenamiento jurídico, sea de fuente nacional o supranacional, nada impide al juez su aplicación, pues quien pretenda lo contrario en un caso determinado, ha de hacerlo por medio de otras acciones y ante otras instancias. El hecho de no actuar los Tribunales conforme a lo que se viene diciendo en materia de juicios que involucren infracciones a derechos fundamentales del hombre, sería justamente volver a épocas pretéritas, donde tal Estado de derecho, o bien no existía, o no era respetado.

SÉPTIMO: Que, respecto de lo anterior, el Fisco de Chile debidamente representado por el Consejo de Defensa del Estado, alegó como defensa y excepción, en primer lugar, que el demandante habría obtenido una reparación integral de sus perjuicios tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, así como por otras vías diferentes a la simple entrega de una cantidad de dinero, constituidas por actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a las violaciones a los derechos



Foja: 1

humanos, como son la construcción de memoriales, Museo de la Memoria y Derechos Humanos, establecimiento del día nacional del detenido desaparecido, entre otras.

Sin embargo, las pensiones establecidas en las leyes que cita el demandado, y conforme figuran en oficio del IPS acompañado a folio 29, valorado conforme a su naturaleza de instrumento público no objetado, constituyen a juicio de esta sentenciadora, beneficios sociales en dinero, tendientes a cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por Chile, referentes a la dignificación de las víctimas, la consecución de una mejor calidad de vida para las familias directamente afectadas y la obtención, en definitiva, de una democracia plena y paz social. En consecuencia, las reparaciones en dinero, recibidas por el actor, como pensión mensual, hasta la fecha, que serán percibidas por él por los años de vida que tenga, si bien constituyen una reparación e indemniza en parte a las víctimas de violaciones de derechos humanos, esto se hace con estándares y criterios objetivos, en forma genérica y se aplica sin distinción o correlación necesaria con el daño efectivamente padecido por esa persona en particular, por lo que no por ello es posible concluir que los daños causados en su totalidad, han sido efectiva y completamente reparados, especialmente el daño moral que puede haber causado la acción de agentes del estado en una persona en particular.

Ahora, en cuanto a aquellas reparaciones denominadas como reparaciones “simbólicas”, obedecen a esferas y finalidades jurídicas diferentes, por lo que las consideraciones que se tuvieron en cuenta para determinar a los beneficiarios de las pensiones de las citadas leyes, no resultan vinculantes para la procedencia de la indemnización civil, lo que debía determinarse por sentencia judicial, razón por la cual se desestimará completamente esta defensa de reparación integral del daño.

OCTAVO: Que, en segundo lugar y en forma subsidiaria, la demandada planteó como defensa y opuso como excepción, la prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios, por haber transcurrido a su juicio, con creces el plazo de 4 años contemplado en el artículo 2332 del Código Civil, contados desde la fecha en que habría ocurrido la detención, privación de libertad y torturas sufridas por el



Foja: 1

demandado, entendiendo suspendida la prescripción, durante el período de la dictadura militar iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de la víctima de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de Justicia. En subsidio de lo anterior, invocó el plazo de 5 años contemplado en el artículo 2515 del Código de Bello, desde que se hizo exigible el derecho a indemnización, en ambos casos hasta la fecha de notificación de la demanda, hecho acaecido el día 21 de febrero del 2022. Refuerza su defensa afirmando que, el principio general que debe regir la materia es el de la prescripción de la acción de responsabilidad civil, por cuanto no existiría tratado internacional alguno que contenga norma que declare su imprescriptibilidad, respecto del caso sublite. Es necesario tener presente que esta argumentación coincide, con la elaborada por parte del Consejo de Defensa del Estado en otras causas relativas a violaciones de derechos humanos.

NOVENO: Que, en el caso de marras, el fundamento de la acción indemnizatoria civil deriva de un delito catalogado como crimen de lesa humanidad, cometido por funcionarios estatales atentando contra los derechos inherentes a la persona humana, con el monopolio del ejercicio de la fuerza amparado en las normas de orden público vigentes a la época, para cuya protección tiene ahora como respuesta, la aplicación de las normas y principios que conforman el Derecho Internacional que haya sido ratificado por Chile y que en tal condición, se entiende incorporado al derecho interno chileno.

Por el Derecho Internacional, se incorpora en forma expresa la imprescriptibilidad de la acción persecutora por un delito de lesa humanidad, según lo establecen diversos instrumentos internacionales, como en el Convenio de Ginebra sobre tratamiento de los prisioneros de guerra, y especialmente en la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de Las Naciones Unidas, del año 1968, que dispone la imprescriptibilidad de éstos delitos cometidos en tiempo de guerra o de paz, y según la definición del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, se refiere únicamente a la acción penal. Es decir, no hay cuerpo normativo interno o internacional, que haya otorgado en forma



Foja: 1

alguna, el mismo carácter de imprescriptibilidad a la acción civil resarcitoria, para poder así incorporarla y hacer aplicación de ello por parte de los juzgados civiles chilenos.

En este sentido cabe preguntarse entonces si el derecho internacional estableció expresamente la imprescriptibilidad de la acción penal, por tratarse de delitos de lesa humanidad que comprometen el interés público que de ellos deriva y por ser inherentes a toda persona humana, por qué no reguló de igual manera a la acción civil de reparación. La explicación, a juicio de esta sentenciadora, se contiene en que la acción civil de indemnización de perjuicios apunta a un aspecto patrimonial de la reparación, que no es propia ni inherente al interés público comprometido en los hechos de lesa humanidad.

A mayor abundamiento, resulta de público conocimiento que las distintas Cortes Internacionales cuando han entrado en conocimiento de las materias que le han sido reclamadas en la esfera de sus competencias, lo han hecho en aquellas demandas que dicen razón con aspectos de tal relevancia, que han decidido ejercer su jurisdicción, a pesar que gozan de la facultad de determinar qué demandas son de su interés y cuales entran a conocer, precisamente en consideración a la relevancia pública internacional que ello implica. Así, en estos términos, las acciones que buscan únicamente un resarcimiento patrimonial de los afectados, si bien pueden resultar atendibles por la naturaleza de los hechos que le resultan de antecedente, no tienen ni el carácter ni la relevancia suficiente para ejercer jurisdicción, por lo cual, son siempre de conocimiento exclusivo de cada legislación interna.

DÉCIMO: Que, es menester tener presente que aunque ciertas responsabilidades se sometan al Derecho Público propiamente tal, ello no obsta a que puedan extinguirse por el transcurso del tiempo, conforme a las normas comprendidas en el mismo sector del Derecho, atendido que la prescripción no es ajena a esas normativas, por el carácter universal que tienen, pudiendo aplicarse en todas las disciplinas que pertenecen al Derecho Público, con excepción de aquellas en que la propia ley disponga lo contrario.

Tampoco se puede obviar la existencia de normas expresas en el ordenamiento jurídico chileno que establecen la prescripción de todas las



Foja: 1

acciones civiles que pueden deducirse por toda persona ante el Tribunal que tenga competencia para ello, incluso de acciones reparatorias establecidas en distintos cuerpos legales en contra del Estado, especialmente atendido que no existe norma internacional, ni interna que lo limite, siendo imperativo a todo Juez la aplicación de la prescripción, una vez invocada por quien pretende, y siempre por cierto cuando se den los supuestos que la ley prescribe y autoriza para ello. Y cuando el legislador ha querido darle el carácter de imprescriptible a ciertas acciones civiles, lo ha establecido expresamente, como en el caso de artículo 4º de la ley N°19.260, cuyo inciso primero declara la imprescriptibilidad del derecho a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia y de jubilación por cualquier causa en los regímenes de previsión fiscalizados por la Superintendencia de Seguridad Social.

En el mismo sentido, aunque con excepciones, se han pronunciado los tribunales superiores chilenos, y especialmente es menester tener presente la sentencia dictada por el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013, autos Rol ingreso corte N°10665-2011, “Episodio Colegio Médico Eduardo González Galeno”, agregada en autos, acompañada por la demandada, donde queda ampliamente establecido que ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y tampoco la Convención de Ginebra contiene normas que declaren imprescriptible la acción civil o impidan a cada Estado aplicar su legislación interna sobre la materia, siendo aplicable la prescripción de la acción civil.

UNDÉCIMO: Que en este mismo orden de ideas, es menester reiterar que es el artículo 63 de la Convención Americana de Derecho Humanos, la que establece dentro de la competencia de la Corte Interamericana, la posibilidad, en caso de ser procedente, del pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Sin embargo, nada dice respecto de la imprescriptibilidad de la acción de reparar. Lo anterior se advierte además de lo dispuesto en el artículo 1.1, y 63.1 de la Convención Americana citada, que rezan: *“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin*



Foja: 1

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

Artículo 63. 1. “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. ”

De la lectura e interpretación de estos artículos, no es posible concluir en forma alguna que, se excluye la aplicación del derecho interno, o que la responsabilidad civil del Estado perseguida ante un tribunal chileno, distinto de la Corte Interamericana, por esa clase de hechos, queda únicamente sujeta a disposiciones de Derecho Internacional, toda vez que como se manifestó, el artículo 63.1 establece expresamente las competencias de esa Corte Interamericana, y no de otra.

Dar aplicación a la prescripción en materia civil, en caso alguno importa hacer primar el derecho interno por sobre el derecho internacional, atendido a que no existe norma ni estatuto internacional que haga referencia alguna a la imprescriptibilidad en materia civil, es decir, para que una normativa prime sobre otra, deben existir al menos dos normativas, lo que en el caso de lo aquí analizado no ocurre, porque sólo existe la normativa chilena que hace expresa mención a la prescripción y no se ha dictado norma o ley alguna que disponga lo contrario.

Del mismo modo, tampoco se advierte incoherencia en que por una parte sea imprescriptible la acción penal por delitos de lesa humanidad, consagrado expresamente en el derecho internacional, con la aplicación de la prescripción en materia civil, toda vez que se trata de esferas de responsabilidad distintas, la acción penal de los delitos de lesa humanidad busca además de la sanción punitiva del personalmente responsable, que ha comprometido el interés público que deriva de esos delitos, por ser inherentes a toda persona humana, mientras que la acción civil de resarcimiento de los daños efectivos o morales experimentados injustamente por los demandantes, es, en rigor, a un asunto de índole pecuniario y



Foja: 1

personal de éstos, que debe distinguirse de otros aspectos o alcances de la responsabilidad estatal.

No se advierte incoherencia en la aplicación de la imprescriptibilidad de la acción penal, y la aplicación de la prescripción de la acción civil, toda vez que existe un mandato jurídico expreso respecto de la primera y no así de la segunda, por lo que a falta de normativa expresa, no cabe al intérprete homologar, o aplicar por analogía.

Por lo tanto, y de todo lo ya razonado en este considerando es que se afirma por ésta sentenciadora que, no hay sustento normativo internacional ni nacional para excluir, en el caso de marras, la aplicación de la prescripción de la acción civil reparatoria intentada, lo que en caso alguno contraviene al derecho internacional que no ha manifestado lo contrario.

DUODÉCIMO: Que, continuando con el análisis de la excepción de prescripción, lo que en autos se intenta es una acción civil ante este juzgado competente, particularmente la acción de indemnización de perjuicios por daño moral, por responsabilidad extracontractual, en éste caso, del Estado de Chile, a consecuencia de ilícitos penales y de lesa humanidad causada por agentes, que a la época de ocurridos los hechos, ostentaban y abusaban de su calidad de agentes del estado, calidad que hoy no ostentan y que por dichos ilícitos, han sido juzgados y condenados a penas privativas de libertad, por lo que conforme a las normas de responsabilidad extracontractual, son los primeros sujetos pasivos llamados a responder civilmente de los daños por ellos causados, sin que exista constancia que ellos hayan sido demandados, ni en estos, ni en otros juicios civiles.

Cabría entonces preguntarse la razón de la ausencia de demandas civiles de indemnización de perjuicios respecto de aquellos culpables y personalmente responsables, y la respuesta lógica y jurídica se encuentra, en que, justamente es el artículo 2314 del Código Civil, la norma que obliga al autor de un delito, en tanto persona natural, a indemnizar los perjuicios civiles ocasionados con su actuar, y en ese entendido, también resulta aplicable el artículo 2332 del mismo Código Civil, que expresamente dispone la prescriptibilidad de esa acción destinada a la reparación civil.



Foja: 1

Además de lo ya expresado, con la posibilidad que otorga la ley de accionar por quién haya sufrido daños, sea o no la víctima directa del hecho delictivo, en contra del personalmente responsable, se busca que aquel que causó el daño, sea también quién responda con su patrimonio, al resarcimiento de los mismos, y para el caso que no se accione en su contra dentro del plazo que la ley dispone, el ordenamiento jurídico con la figura de la prescripción, otorga certeza, no sólo al autor del delito, sino que a la sociedad toda.

Así, siendo la certeza jurídica un pilar y un principio consagrado en nuestra legislación, y en la generalidad de los ordenamientos jurídicos, incluso los internacionales, ésta se perdería al pretender que sea procedente la imprescriptibilidad de la acción civil, especialmente sin existir norma que por su carácter de extraordinaria, debe estar expresada en texto legal, sea interno o internacional.

De aceptar que se debe homologar, equiparar o aplicar por analogía la imprescriptibilidad de la acción penal -expresamente recogida por el orden internacional-, con la imprescriptibilidad de la acción civil -que no es recogida ni tácita ni expresamente por ordenamiento jurídico alguno-. La acción civil por indemnización de perjuicios, se dirige en contra del Estado, -ente ficticio cuya existencia perdura más allá de sus miembros-, perseguida por un delito cometido por el -entonces-agente estatal, por lo que para su interposición y aplicación tendría un espacio temporal indeterminado, desconocido, incierto y permanente, teniendo además en cuenta que puede ser deducida por todo aquel que invoque un daño moral que sienta haya sufrido por un delito de lesa humanidad, cometido por agentes estatales. Claramente, atenta contra la seguridad y certeza jurídica, así como contra la paz social.

El Estado Chileno, se conforma en la actualidad, por otros agentes, elegidos democráticamente, y distintos de aquellos causantes de delitos lesa humanidad, y se pretende que sea éste Estado el que debe resarcir perjuicios, con los fondos estatales que no son otra cosa que parte del patrimonio al que contribuyen la mayoría de los chilenos con el pago de sus tributos, y que no tienen, ni han tenido participación delictual, ni personal, en los hechos que han causado perjuicios, ocurridos décadas



Foja: 1

atrás, situación que de aceptarla, contraviene también sin lugar a dudas la certeza jurídica y la paz social.

Por lo tanto y con todo lo ya razonado en este considerando, es que se afirma por esta magistratura que no hay sustento normativo, ni nacional ni internacional, para no dar aplicación en autos, a la prescripción de la acción civil reparatoria intentada, y no dar aplicación a la normativa existente a pretexto de la gravedad de los delitos o daños causados, por muy condenables que sean, importan una transgresión al estado de derecho, el que se puede debilitar cada vez que no se aplique, lo que deviene en caos e incertezas que sin duda alguna afectan al derecho público, es decir, se afectaría justamente el interés público, que es uno de los bienes jurídicos que se pretende siempre resguardar.

DÉCIMO TERCERO: Que, en el caso de marras tiene aplicación, además de los otros cuerpos normativos ya citados, las disposiciones del Código de Bello, que lejos de ser contrarias al ordenamiento internacional, son coadyudantes y complementarias, tal como lo señala el preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que encuentra fundamento en sus artículos 2314 y siguientes, que establecen el principio de responsabilidad e indemnización de todo daño o perjuicio producido por un delito o cuasidelito. En ese sentido, al ampararse los demandantes en un instituto jurídico para perseguir la responsabilidad civil extracontractual del Estado, establecida en el Código Civil, debe darse aplicación a ello, no sólo en lo que los beneficia, pretendiendo extraerse de algunas de sus consecuencias que no le resultan beneficiosas al actor, como lo es la prescripción bajo las normas del derecho interno civil.

Dicho de otro modo, acciona al actor conforme a las reglas de competencia, particularmente de orden público interno y sin embargo, además de no existir norma expresa de imprescriptibilidad en tratados o normas internacionales, pretende que ésta juez desatienda la normativa que por mandato constitucional está llamada a aplicar, lo que sería actuar, como ya se expresó, fuera de un estado de derecho.

DÉCIMO CUARTO: Que, constituye un principio general del derecho, la prescriptibilidad de las acciones, fundado en la necesidad de



Foja: 1

garantizar la estabilidad, seguridad y certeza jurídica, que encuentra sustento legal en el artículo 2332 del Código Civil respecto de la prescripción de la responsabilidad extracontractual. Aquella disposición nos indica, que las acciones que concede aquel título -XXXV de los delitos y cuasidelitos- por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto. Las normas de prescripción que contiene el Código Civil, resultan aplicables a favor y en contra del Estado, según reza el artículo 2497 del mismo cuerpo normativo, por lo cual deben ser aplicadas en el caso sub lite, toda vez que justamente se persigue la responsabilidad civil del Estado, no existiendo norma en contrario en otra disposición legal.

En este sentido, considerando que la detención y posterior liberación del demandante transcurrió durante el mes de enero de 1974, y teniendo en consideración las disposiciones legales recién citadas, acogiendo, por otro lado, la teoría elaborada por la Excelentísima Corte Suprema en la sentencia de fecha 21 de enero del 2013, causa Rol N° 2182-1998, que atenúa la aplicación irrestricta de ellas y considera que los titulares de la acción indemnizatoria no se encontraban en condiciones de haberla ejercido, en tanto no exista la información necesaria y pertinente para hacer valer ante Tribunales de Justicia su derecho al resarcimiento por el daño sufrido, así como su condición de víctima, lo que se debe entender producido el día en que se constituye el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, esto es, el día 4 de marzo del año 1991, tenemos en consecuencia que, a la fecha de interposición de la demanda y más aún, a la fecha de notificación de la misma, ha transcurrido con creces el plazo para que proceda la prescripción extintiva de la acción, razón por la cual debe necesariamente ser acogida la excepción opuesta, como se dispondrá en lo resolutivo del fallo.

Finalmente, no puede entenderse que el plazo de prescripción fue interrumpido al haber efectuado el Estado los pagos que fueron invocados por éste como indemnización de los perjuicios que se alegan en estos autos por daño moral, toda vez que se rechazó la excepción de reparación integral del daño por los montos en dinero percibidos por los demandantes, tal como razonó este Tribunal al rechazar la excepción de reparación satisfactoria, y al no considerarse como pago de indemnización,



Foja: 1

entonces no puede atribuírseles la virtud de interrumpir el transcurso del plazo de prescripción.

DÉCIMO QUINTO: Que, en virtud de lo que ya se viene razonando, esta sentenciadora no emitirá pronunciamiento respecto de los daños reclamados, por resultar inoficioso e incompatible con lo ya resuelto.

DÉCIMO SEXTO: Que la restante prueba descrita, más no ponderada en especial, en nada altera lo que viene decidido.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, no habiendo resultado totalmente gananciosa la demandada y en conformidad con el artículo 144 del Código Adjetivo Civil, cada parte pagará sus costas.

POR ESTAS CONSIDERACIONES y teniendo presente además lo dispuesto en los artículos 24, 1700, 1706, 1710, 2314, 2316, 2329, 2332, 2.492, 2514, 2515 y siguientes del Código Civil; artículos 138, 140, 144, 160, 170, 254, 342, 358, 426 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 1, 5, 6, 7, 19, 20 y 38 de la Constitución Política de la República de Chile; artículos 2, 3, 4 y 44 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado N° 18.575; y disposiciones pertinentes de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención de Ginebra; y demás instrumentos del derecho internacional pertinente, se declara:

I.- Que, **SE ACOGE** la excepción de prescripción opuesta por la demandada, conforme lo razonado en los motivos pertinentes, y en consecuencia se rechaza la demanda de folio 1, rechazándose en todo caso las demás defensas deducidas por la parte demandada.

II.- Que, **CADA PARTE** pague sus costas.

Regístrese y notifíquese.

C-46-2022

Pronunciada por MARÍA CECILIA MORALES LACOSTE, Jueza Suplente.



Foja: 1

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiuno de Octubre de dos mil veintidós**

